

CONTRA LA PARAPOLÍTICA Y LA LEY DE PERDON Y OLVIDO EN COLOMBIA : VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS

En nuestro país, Colombia, entre julio de 2002 y junio 2006, período correspondiente al primer mandato presidencial del señor Alvaro Uribe Vélez, 11084 colombianos fueron asesinados o desaparecidos por razones políticas.

En nuestro país, los grupos paramilitares torturan, desaparecen y, en ocasiones, despedazan aún vivos con motosierras a los miembros de la oposición política, a líderes sociales y a defensores de derechos humanos.

No obstante lo anterior, en el marco de la legislación penal en vigor puesta en marcha por iniciativa de la actual administración, miles de paramilitares responsables de estas atrocidades solo purgarán penas de prisión irrisorias, lo que equivale, en la práctica, a su impunidad. Adicionalmente, ni la devolución de los bienes materiales expropiados a los ciudadanos al amparo de la actividad paramilitar, ni el derecho de las víctimas a conocer toda la verdad son eficazmente garantizados por la ley.

Como explicar una tal benevolencia con grupos que se oponen abiertamente a nuestros más básicos principios constitucionales y que desafían el núcleo central del Derecho internacional de los derechos humanos? Desde su paso por la Gobernación de Antioquia, el señor Alvaro Uribe Vélez, promovió la conformación de las Cooperativas de Seguridad Rurales –Convivir-, las cuales en los hechos no fueron más que la legalización de las actividades de los grupos paramilitares. Este período se corresponde con una de las épocas más dramáticas de la violencia paramilitar en Urabá, al noroccidente de Antioquia. Más adelante, en la campaña presidencial de 2002, los grupos paramilitares no ocultaron su favoritismo por el entonces candidato Alvaro Uribe Vélez. En diversas regiones del país, pero especialmente en centros urbanos y en zonas rurales de la Costa Atlántica, los paramilitares forzaron el voto en favor de su candidato a través de la amenaza y la extorsión. Ese mismo año, los paramilitares declararon tener el control del 30% del Parlamento a través de representantes y senadores. Algunos de ellos, todos próximos al Presidente, se encuentran detenidos en cárceles colombianas procesados por la Corte Suprema de Justicia bajo cargos relacionados con el paramilitarismo. Altos funcionarios del gobierno, entre ellos el ex-director de la agencia de seguridad estatal, corren la misma suerte; la ex-ministra de relaciones exteriores debió abandonar su cargo por su parentesco directo con uno de los senadores de la “parapolítica”.

El actual proceso de negociación con los grupos paramilitares pretende ocultar en el fondo los históricos vínculos del cuerpo militar, determinados gremios económicos tales como ganaderos, bananeros, terratenientes, industriales y determinadas compañías multinacionales con el paramilitarismo.

Ante esta situación, como colombianos y colombianas que hemos salido del país víctimas de estas injusticias, y como internacionalistas que hemos apoyado a las organizaciones populares colombianas

CONSIDERAMOS :

- Que pese a los ingentes esfuerzos del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez por presentar como benéficos los resultados de la aplicación de su política de seguridad democrática, el fracaso de ésta se evidencia en campos y ciudades a través de hechos de ocurrencia cotidiana como los asesinatos, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado interno, la persecución judicial sin motivos legítimos contra miembros de la oposición política, activistas sociales, líderes sindicales, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos.
- Que el gobierno del presidente Uribe Vélez falta, en forma grave, a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de respeto a los derechos humanos.
- Que el país no sólo está preparado para la verdad, sino que la necesita para iniciar un proceso que conduzca verdaderamente a la paz con justicia social y a la construcción de un Estado que garantice los derechos de todas las personas y grupos sociales y políticos.
- Que no puede haber impunidad ni penas simbólicas para quienes han cometido o inducido a la realización de crímenes de lesa humanidad. Rechazamos tajantemente una ley de punto final para esos actos tan execrables. Se debe establecer también a las claras la responsabilidad del Estado en estos actos de terror contra la población y actuar en consecuencia.
- Que aquellos funcionarios que dentro de la estructura del Estado han propiciado el actual orden de cosas no tienen la legitimidad y la autoridad moral para encontrar soluciones justas a esos problemas.

En consecuencia **EXIGIMOS** que:

- Se conozca la verdad de lo que ha pasado en Colombia y se identifiquen y castiguen, sin excepción, a los y las responsables de esos crímenes y a sus beneficiarios.

- Haya reparación integral a las víctimas de la violencia para-estatal.
- Se abra un proceso por crímenes de lesa humanidad contra aquellos políticos y militares que durante el ejercicio de sus cargos han avalado el régimen de terror en Colombia o han ejecutado crímenes.
- Se desmonte la estructura de la parapolítica existente en Colombia y se anulen las leyes y decisiones que bajo su amparo se hayan tomado.
- Se trabaje para encontrar una solución política al conflicto que desde hace décadas desangra Colombia. El Estado colombiano en vez de continuar insistiendo en salidas militares debe crear los mecanismos y espacios que faciliten la negociación entre las partes. Un acuerdo humanitario que permita el intercambio de prisioneros sería una de ellas.

A los gobiernos de Europa y al Parlamento europeo, les instamos a detener toda ayuda militar al gobierno del presidente Alvaro Uribe y verificar la destinación final de los fondos de cooperación al desarrollo, así como exigir al gobierno colombiano el respeto a la vida y demás derechos fundamentales de los militantes de la oposición y de los defensores de derechos humanos.

RED EUROPEA DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
Abril de 2007